

PENSAR EL SUROCCIDENTE

ANTROPOLOGÍA HECHA EN COLOMBIA

TOMO III

Enrique Jaramillo B.

Axel Rojas

Editores



Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia / Hermann Trimborn, Milciades Chaves, Kathleen Romoli, María Victoria Uribe [et al.]; Editado por Enrique Jaramillo B. y Axel Rojas. -- Cali: Universidad Icesi. Sello Editorial, 2019.

962 pp. tablas, mapas, gráficos.

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

1. ANTROPOLOGÍA HECHA EN COLOMBIA. 2. ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 3. ANTROPOLOGÍA CULTURAL. 4. ANTROPOLOGÍA REGIONAL – SUROCCIDENTE. 5. COLOMBIA. 6. ETNOLOGÍA – INVESTIGACIONES. I. Título. II. Hermann Trimborn, III. Milciades Chaves IV. Milciades Chaves, Kathleen Romoli. V. Jaramillo, Enrique y Axel Rojas editores. VI. Universidad Icesi.

ISBN: 978-958-8936-87-1 / 978-958-8936-88-8 (PDF).

DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/ee.4.2019>

305.898 A636 - scdd 21

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Catalogación en la fuente – Universidad Icesi. Biblioteca

© Universidad Icesi, 2019

© Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

© Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales, Universidad del Cauca

© De los autores: Enrique Jaramillo B., Axel Rojas (Editores académicos), 2019

Primera edición

Editorial Universidad Icesi, junio de 2019

Diseño y diagramación: Johanna Trochez - Ladelasvioletas

Imagen de carátula: Enrique Jaramillo B.

Coordinador Editorial: Adolfo A. Abadía

Editorial Universidad Icesi

Calle 18 No. 122-135 (Pance), Cali – Colombia

Teléfono: +57 (2) 555 2334 | E-mail: editorial@icesi.edu.co

<http://www.icesi.edu.co/editorial>

La Editorial Universidad Icesi no se hace responsable de las ideas expuestas bajo su nombre, las ideas publicadas, los modelos teóricos expuestos o los nombres aludidos por el(los) autor(es). El contenido publicado es responsabilidad exclusiva del(los) autor(es), no refleja la opinión de las directivas, el pensamiento institucional de la Universidad Icesi, ni genera responsabilidad frente a terceros en caso de omisiones o errores.

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos sin autorización, siempre y cuando se cite el título, el autor y la fuente institucional.

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

Contenido

Reconocimientos.....	9
----------------------	---

Introducción. Pensar el suroccidente

<i>Enrique Jaramillo B. y Axel Rojas</i>	11
--	----

Zonas de contacto: colonialismo y el problema del otro

Señorío y barbarie en el valle del Cauca. "Introducción"

<i>Hermann Trimborn</i>	29
-------------------------------	----

Los indígenas del Cauca en la Conquista y la Colonia

<i>Milcíades Chaves Chamorro</i>	59
--	----

Las tribus de la antigua jurisdicción de Pasto en el siglo XVI

<i>Katbleen Romoli</i>	83
------------------------------	----

Documentos del siglo XVIII referentes a la provincia de los pastos: problemas de interpretación

<i>María Victoria Uribe</i>	129
-----------------------------------	-----

Economía, poder y región

Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las provincias del Cauca 1810-1830

<i>Germán Colmenares</i>	159
--------------------------------	-----

Las tierras bajas del Pacífico colombiano. Población y poblamiento

<i>Robert West</i>	193
--------------------------	-----

La configuración histórica de la región azucarera

<i>José María Rojas</i>	251
-------------------------------	-----

Sociedades y espacios en el litoral Pacífico sur colombiano (siglos XVIII-XX)

<i>Odile Hoffmann</i>	283
-----------------------------	-----

Emergencias: del problema del indio a la política indígena

Problemas de actualidad <i>Juan Friede</i>	313
Problemas sociales de algunas parcialidades indígenas del occidente de Colombia <i>Luis Duque Gómez</i>	339
Historia política de los paeces <i>Víctor Daniel Bonilla S.</i>	353
Movimiento indígena y “recuperación” de la historia <i>María Teresa Findji</i>	391
El movimiento indígena en Colombia <i>Trino Morales</i>	409

Organización social

Bases para el estudio de la organización social de los páez <i>Segundo Bernal Villa</i>	423
Minería del oro y descendencia: Güelmambí, Nariño <i>Nina S. De Friedemann</i>	445
Conflicto interétnico y shamanismo: los paéces <i>Myriam Jimeno Santoyo</i>	493
Etnogeografía y etnogeología de Coconuco y Sotará <i>Franz X. Faust</i>	505
Hacia una antropología de la indumentaria: el caso de los guambianos <i>Ronald A. Schwarz</i>	541

Clases, tierra y trabajo

Formación de un sector de clase social. La burguesía azucarera en el Valle del Cauca durante los años treinta y cuarenta <i>Charles David Collins</i>	575
La respuesta de la industria azucarera a la sindicalización en el sector <i>Rolf Knight</i>	631

Unidades de producción nortecaucanas (Colombia): modernización y funcionamiento (inédito: 1981) <i>Jaime Arocha Rodríguez</i>	665
Evolución del trabajo asalariado rural en el Valle del Cauca, Colombia, 1700-1970 <i>Michael Taussig</i>	685
Tenencia y uso de la tierra por la industria azucarera del Valle del Cauca <i>Simeone Mancini M.</i>	725
Origen y formación del ingenio azucarero industrializado en el Valle del Cauca <i>Eduardo Mejía Prado y Armando Moncayo Urrutia</i>	753
Movilizaciones y luchas	
Orígenes y expresiones de una ideología liberal <i>Gustavo De Roux</i>	799
Una organización indígena en lucha por la tierra: el Consejo Regional Indígena del Cauca <i>Christian Gros</i>	831
Iglesia, sindicalismo y organización campesina <i>Cristina Restrepo</i>	853
El movimiento de integración del Macizo Colombiano <i>Luz Ángela Herrera</i>	885
Interpretando el pasado Nasa <i>Joanne Rappaport</i>	909
Intelectuales, campesinos e indios <i>José María Rojas</i>	931
Índice analítico	955

El movimiento de integración del Macizo Colombiano¹

LUZ ÁNGELA HERRERA

En la década de los años noventa se presentaron dos acontecimientos importantes regionales a nombre del Macizo Colombiano: el paro cívico regional de 1991 y el paro del suroccidente en 1999, ambos organizados por el Movimiento de Integración del Macizo Colombiano, con una movilización, en ambos casos, de más de veinte mil campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, transportadores, maestros y pobladores urbanos. El impacto producido en el ámbito nacional por estos dos hechos, con una diferencia de ocho años en el tiempo, requiere indagar sobre la continuidad de este proceso e invita a volver los ojos sobre su naturaleza.

Si bien, las dos demostraciones constituyen el eje en torno del cual se construye este ejercicio de 1990-2000, es indudable que las protestas que las precedieron y las que tuvieron lugar durante esa década permiten explicar la gran capacidad de movilización anidada en el departamento del Cauca, que culmina en esta etapa como resultado de una coalición de fuerzas sociales y políticas que condujo a la elección popular de gobernador indígena y a una propuesta de organización del bloque sur del país planteada por los gobernadores de seis departamentos de esa región.

Lo que expresan las diversas formas de protesta y movilización es un proceso de construcción de un movimiento social y de configuración de una región que tiene sus raíces en la sociedad colonial. En el terreno de la historia, el Macizo se explica como eje de resistencia y zona de refugio, y en el de la acción colectiva señala pautas de configuración del territorio como región. Son formas de interacción múltiple, de solidaridad y orientaciones con distintos significados que se refuerzan en la acción y que explican, en parte, la capacidad para desafiar al Estado y las instituciones.

A partir de 1985 empieza a transformarse la concepción local de las luchas hacia una visión regional, con la propensión de las organizaciones a participar en procesos que involucran a toda la población y tienen como referencia el

1 Original tomado de: Luz Ángela Herrera. 2003. *Región, desarrollo y acción colectiva: movimiento de integración del Macizo Colombiano*. Bogotá: Cinep.

Macizo. La primera etapa del Movimiento de Integración del Macizo se inicia con el paro de Rosas en el año de 1991 y culmina en 1999 con el paro cívico del suroccidente colombiano, que develan viejas prácticas y asumen los problemas de los campesinos del Macizo y del norte del departamento de Nariño a la luz de propuestas de cambio social y de transformación de valores. Así se plantea, como cambio, pasar de la explotación a la conservación; de la cantidad a la calidad de vida; de la competencia a la solidaridad y de la dominación y la violencia a salidas negociadas de los conflictos.²

Los hechos que han contribuido a la construcción social de región están en la base de la propuesta del movimiento social del Macizo. Se sustenta, en primer lugar, en la identidad territorial, por la forma de relacionarse con la naturaleza. En segundo lugar, en la identidad regional que trasciende los límites jurisdiccionales por los rasgos culturales, políticos, económicos y ecológicos. Por último, en el carácter pluralista y pluriétnico que permite la participación social y política de los diferentes grupos sociales.³

Las grandes transformaciones del siglo XX guardan significados distintos en cada región del país. La raíz se encuentra en la precaria capacidad del Estado para mediar en los conflictos sociales. Por una parte la crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales ha significado el comienzo del fin de las adscripciones políticas hereditarias, ligadas al acceso de las clientelas a los servicios públicos y a la participación en el botín burocrático. En el Cauca se ha profundizado más la fragmentación entre las elites regionales y los sectores populares: por un lado, va la movilización social y por otro los partidos políticos.⁴

Lo que hay en el trasfondo es un nuevo significado en la noción de ciudadanía, en cuanto se extiende más allá de las formas tradicionales de representación por la vía electoral y avanza hacia la participación directa en asuntos que interesan a la colectividad. De ello se desprende que este movimiento social busca la inclusión y la reconfiguración de la política desde una percepción de región, a través de la articulación entre actores y grupos sociales.

Este capítulo sugiere en la primera parte el proceso de consolidación del movimiento campesino e indígena alrededor de la reforma agraria; en la segunda, sin perder la especificidad de estos dos movimientos, se trata de explicar cómo se va configurando un movimiento social que comporta otras características que le imprimen una dinámica muy especial al Cauca: va desde el ascenso de las luchas étnicas hasta las formas de interacción social y política.

2 Entrevista con líderes del Macizo. Septiembre de 2001.

3 *Maciceña*, revista del Movimiento de Integración del Macizo Colombiano, noviembre de 2000, año 1 N° 1, Popayán y entrevista líderes en septiembre de 2001.

4 Entrevista líderes del Macizo en septiembre de 2001.

Reforma agraria y movimiento campesino e indígena

Los movimientos sociales ocurridos a partir de la década de los sesenta se pueden asociar a la necesidad de la autorrealización y de acuerdo con los paradigmas de la época a la lucha de clases. La dinámica del movimiento indígena y campesino está relacionada con las políticas de reforma agraria del Frente Nacional.

Cuando se considera la dimensión política de la cuestión agraria en Colombia se hace evidente que las iniciativas reformistas del Frente Nacional dominaron el escenario en los años sesenta. La reforma agraria fue un componente central dentro de un conjunto de propuestas que apuntaron a restablecer la armonía de las clases sociales bajo la hegemonía de los sectores dominantes que habían sido responsables de la violencia, agregándose la presión externa de la nueva política de los Estados Unidos.⁵ Desde entonces, la reforma agraria no va a conducir a un cambio estructural significativo, salvo si ocurre la irrupción de un enérgico desafío por parte de los campesinos. Pero la población rural se encontraba escindida bajo las líneas del bipartidismo, sobre la base de sus lealtades tradicionales, por lo que los campesinos estaban enfrentados entre sí al apoyar a diferentes sectores de las clases dominantes.

El ímpetu reformista de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) llevó a dar participación a los campesinos en la administración de los servicios agropecuarios como medio para efectuar una reforma agraria. Haciendo uso de sus atribuciones presidenciales crea, por decreto, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC–. Desde ese momento los campesinos son llamados a la participación a través de un canal organizativo que va a permitir la confluencia y la expresión de las diferentes dimensiones de la cuestión agraria. En cuanto a la redistribución de la tierra, desde un principio se coloca como el aspecto central de la actividad de las asociaciones de usuarios. El ascenso del campesinado en materia de organización, el papel del Incora, la sanción de la Ley 1ª de 1968 sobre aparceros y arrendatarios, van a provocar un endurecimiento en la actitud de los terratenientes.

La historia de la ANUC evidencia el desarrollo de las contradicciones entre el movimiento campesino y la clase terrateniente y de la propia lucha por definir el rumbo del movimiento. La declaración de principios adoptada en el Primer Congreso, durante el cual la ANUC se constituye oficialmente (julio de 1970), muestra que la cuestión de acceso a la tierra se despliega como la bandera principal de lucha del movimiento;⁶ aunque el tono era radical, las demandas se mantenían dentro de las políticas de reforma del Gobierno.

5 León Zamocs, *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*, p. 169.

6 Sobre la ANUC véanse Silvia Rivera. *Política e ideología en el campesino colombiano. El caso de la ANUC*. Bogotá, Cinep, 1982; Cristiana Escobar. *Trayectoria de la ANUC*. Bogotá:

En general, las luchas por la tierra se presentan en zonas donde prevalece el latifundio ganadero y donde tal estructura se combina con el surgimiento del capitalismo agrario. El investigador León Zamosc afirma que en los departamentos andinos, por el predominio de la estructura minifundista, las luchas por la tierra han sido comparativamente limitadas y se han reducido a contextos locales. En las zonas de resguardo las tomas de tierras expresan la aspiración de los indígenas a recuperar los terrenos que han perdido por el proceso histórico de reducción y despojo adelantado por los terratenientes. La principal zona de recuperación de tierras se localiza en los municipios de Toribío, Caloto, Silvia y Totoró, donde más de veinte fincas fueron invadidas por indios paéces y guambianos.

A través de la lucha por la tierra, el movimiento indígena acaba con la hacienda de terraje y transforma la situación del cabildo. La lucha por la tierra es desarrollada en forma de trabajo comunitario sobre las tierras que han usurpado terratenientes y colonos; de este modo la comunidad, que se considera legítima dueña, recupera la posesión a su manera: trabajando. El proceso de recuperación ha significado el reintegro de tierras de hacienda al territorio de resguardo, es decir, al régimen comunal de propiedad establecido desde la Colonia y, por ahí mismo, el restablecimiento de la jurisdicción del cabildo y el reconocimiento de su autoridad. De manera que el proceso de legitimación de la propiedad colectiva se realiza, ante el Incora con base en los títulos de los resguardos conservados en la memoria de los mayores (Findji 1992).

Los conflictos que marcan el final del ciclo de luchas por la tierra en los años setenta están relacionados con la crisis de la ANUC. Los conflictos se refieren al escaso alcance de las luchas, que semejaban expresiones espontáneas, y al aislamiento de las protestas, que indicaban su surgimiento en condiciones muy particulares y con vigencia solo local. Casi sin excepción las acciones fueron reprimidas o enfrentaron la contraofensiva de los terratenientes. Otro factor determinante fue la aplicación del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Turbay Ayala a partir de 1978.

La presencia de grupos armados tuvo un desarrollo muy desigual y le imprimió un sello ideológico a estas luchas. La influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– se extendió a la ocupación de tierras de nueva colonización en el oriente del país y otras zonas.⁷ Según información del Cinep,⁸ las FARC se ubicaron al sur del departamento, en zonas de colonización y de cultivos de coca, especialmente Argelia, Balboa, Mercaderes, Patía, La Vega,

Cinep, sf. y León Zamosc. La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociación de Usuarios Campesino (1987).

7 Véase al respecto León Zamosc. “El campesinado y las perspectivas de la democracia rural”, en Francisco Leal y León Zamosc (comp.). *Al filo del caos*. Bogotá: Tercer Mundo, 1990, p. 342.

8 Elsa Blair. “En el Cauca: los pasos ganados”.

Bolívar, Almaguer, San Sebastián y Santa Rosa. El Ejército de Liberación Nacional –ELN– se localizó hacia San Sebastián, en los límites con el departamento del Huila y desde esta época reconoce la importancia de la lucha cívica y reivindica el abstencionismo frente al proceso electoral. También en esta década el M-19 se traslada al Cauca y encuentra una población indígena que ya tenía un gran desarrollo organizativo propio, lo cual le cerraba el espacio de inserción social y lo condenaba a utilizar la región como mero teatro de operaciones.⁹ Por otro lado, resurge el Movimiento Quintín Lame como propuesta armada indígena en oposición a los terratenientes.

Movimiento Cívico del Macizo Colombiano

Las protestas cívicas ocurren en Colombia por lo menos desde la década del sesenta. Este ejercicio tiene como propósito señalar determinadas diferencias comparativas entre las formas históricas de los conflictos sociales y de clase, y las formas de acción colectiva que surgen actualmente. De manera que el análisis tiende a señalar algunos rasgos de la acción colectiva en un caso específico como es el Movimiento del Macizo Colombiano. A partir de este análisis se intenta comprender la multiplicidad de elementos que concurren en estos procesos de movilización, como son los históricos, los conflictos sociales actuales y las diferentes estructuras sociales que se mezclan para explicar un actor colectivo.

El movimiento del Macizo no es asumido como una unidad de análisis, como un dato. Más bien se trata de considerarlo como un sistema de relaciones sociales. Como movimiento, se explica por su capacidad de movilizar recursos internos y externos, por las estructuras organizativas que articulan orientaciones y propósitos plurales y dan cuenta de diversas formas de comportamiento. El fenómeno rompe una aparente unidad y da cuenta de convergencias y divergencias. La identidad colectiva es establecida mediante procesos de negociación e intercambio de decisiones. El modo como los actores adelantan su acción es la conexión de oportunidades y orientaciones.

El proceso que se inicia desde la década de los ochenta busca la consolidación del Macizo como región. El movimiento del Macizo expresa un renovado interés por construir la representación de lo público con base en un componente geográfico, el Macizo, y un componente cultural, el reconocimiento de la diferencia, en su condición de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, maestros y trabajadores; como ciudadanos, en el curso de los procesos sociales construyen universos políticos a partir de derechos. Sus luchas son por una vida digna y por derechos sociales, políticos, económicos y culturales:

9 León Zamosc. “Campesinado y democracia rural”, p 340.

[...] acá hay miles de mujeres y hombres dignos, abandonados por el Estado, cuyos derechos de acueducto, de electrificación, de vías, de escuelas han sido sistemáticamente desconocidos y le estamos pidiendo al Estado simplemente que nos atienda, simplemente que resuelva los derechos que nos corresponden por ser colombianos.¹⁰

En el ámbito local, a través de cabildos, asambleas, encuentros culturales de organizaciones agrarias y sociales se construyen propuestas de desarrollo que buscan incidir en el ámbito regional con el objeto de construir planes de ordenamiento ambiental, productivo, sostenible e integral, de convivencia y de ciencia y tecnología.¹¹ Los acuerdos firmados entre el Gobierno y diversas organizaciones sociales del Cauca en la década del noventa constituyen la base de una posible agenda de política pública; por lo tanto, de expansión de fronteras de la política institucional.

Las características de la acción colectiva expresan las condiciones internas y externas donde se desenvuelve. Quien plantea las reivindicaciones es el ciudadano como tal, no en cuanto miembro de entidades gremiales, corporativas o políticas sino como usuario de servicios del Estado. Como actor social busca el control colectivo y político a través de las organizaciones, la participación directa en la toma de decisiones, en la celebración de acuerdos y alianzas entre diversos grupos sociales, así como la intervención en ámbitos de poder: alcaldías, concejos, gobernación, cámara y senado. En sus luchas, el Estado es garante de bienes y servicios colectivos y también adversario, porque niega o recorta los derechos que rigen para la nación a los habitantes de las localidades y regiones.¹²

Este movimiento busca dar contenido a un tipo de institucionalidad que sea incluyente: demanda metas negociables y para la realización de cualquier acción en el Macizo exige como criterio fundamental la consulta a las organizaciones sociales campesinas e indígenas; plantea la necesidad de construir una nueva concepción del desarrollo como resultado de procesos económicos, sociales, políticos e históricos; intenta establecer múltiples interacciones con otros actores sociales y políticos que impliquen el reconocimiento de los procesos de integración de los municipios del Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca.

Como alternativa política, con capacidad para convertirse en base institucional de un contrapoder y llenar el vacío dejado por los partidos tradicionales y la izquierda, exige el derecho de ser reconocido como actor social pero como parte de una red, de un sistema de relaciones, y de transformarse en intermediario

10 Intervención de Victor Collazos en El Cairo (Cajibío) el 26 de noviembre de 1999, "La dignidad la mayor fuerza que nos mueve", *Maciceña*, año 1, N°1, noviembre de 2000, p. 14.

11 León Zamocs. "Campesinado y democracia rural", p. 340.

12 Javier Giraldo. La reivindicación urbana..., p.6.

válido de la población con las instancias del poder institucional y en base de una sociedad civil local: “Acontecer de hombres y mujeres que a su trabajo, al jornalear duro, suman su esfuerzo por querer construir mejores opciones de vida”.¹³

El Movimiento de Integración del Macizo Colombiano impulsa una propuesta de construcción social de región que se apoya tanto en identidades históricas y culturales como en las formas de lucha, de articulación y de divergencia y en las estructuras de oportunidad que se dan en el proceso mismo de la movilización: “Existe una historia que hunde sus raíces en el pasado, que al ir poco a poco recuperándola, su construcción y transformación se hacen más conscientes a través de sus luchas y movilizaciones, diciendo y cantando cómo somos y cómo vivimos”.¹⁴

La movilización en la década de los ochenta

Según León Zamosc, la década de los ochenta se caracteriza por el resurgimiento de las luchas campesinas, dado el deterioro de la situación económica en la administración de Julio César Turbay y el relajamiento de la represión en las de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Tal como plantea Zamosc, las movilizaciones recurren a la alteración del orden público, se dirigen al logro de negociaciones directas y de alto nivel con el Gobierno y sugieren que otra causa de los problemas tiene que ver con el tipo de nexos que marca la relación entre el régimen político y la población campesina.¹⁵

Según la investigación de Esmeralda Prada, en esta misma década los campesinos mantuvieron las luchas por la tierra, protestaron en defensa de sus economías, contra la violencia y por el desarrollo de sus regiones. Es decir, se modificó el sentido de la protesta campesina, dado que la intensidad de la represión y la exclusión lograron mellar el sentido antagonista que en algún momento pudo tener el movimiento campesino y las demandas pasaron en buena medida a tratar de hacer cumplir el tipo de institucionalidad ofrecida.¹⁶

Las movilizaciones caucanas que tuvieron lugar en la década de los ochenta se caracterizaron por localizarse en el ámbito municipal; paros, marchas, bloqueos de vías y tomas de oficinas públicas no desbordaron esa frontera. Las negociaciones se celebraron con las administraciones municipales y departamentales, aunque

13 “Sobre la marcha”, en *Maciceña*, noviembre de 2000, p.1.

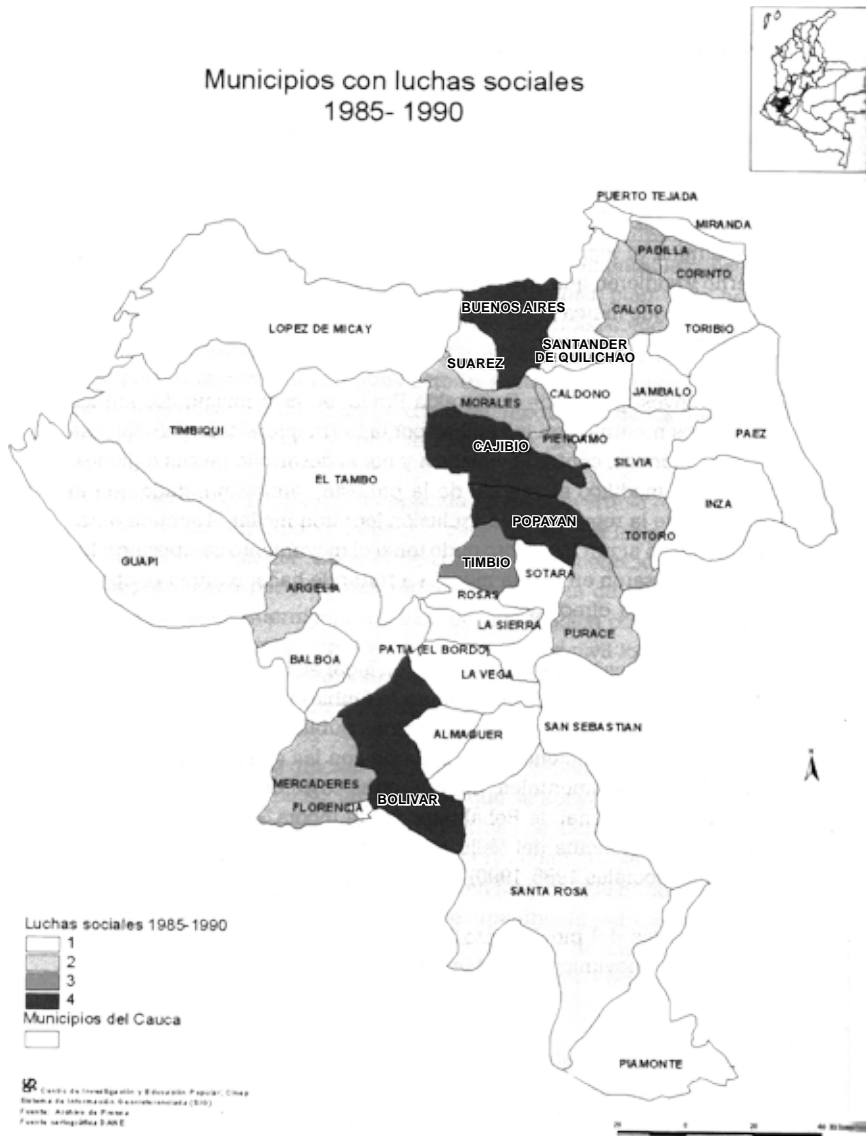
14 “Los principios”, en *Maciceña*, noviembre de 2000, p.11.

15 Véase al respecto León Zamosc. “El campesinado y las perspectivas de la democracia rural”, pp. 317-336.

16 Esmeralda Prada. “Luchas campesinas e indígenas”, en Mauricio Archila y otros. *25 años de luchas sociales en Colombia*, pp. 128-129.

otras tuvieron carácter nacional, como el Plan Nacional de Rehabilitación, el Incora, la Caja Agraria y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (véase mapa 2: Municipios con luchas sociales, 1985-1990).

Mapa 2



Para los líderes del movimiento los años ochenta fueron el período de gestación del movimiento del Macizo, y las protestas de los campesinos de Santa Rosa, Bolívar, San Sebastián y Almaguer constituyeron el punto de partida de ese proceso.¹⁷ Entre 1985 y 1990 ocurren 35 movilizaciones.¹⁸ En primer lugar, los campesinos demandan de las autoridades departamentales y municipales el acceso a servicios públicos y sociales como vías, escuelas y viviendas; en segundo lugar, son momentos de recuperación de tierras, tanto por indígenas como por campesinos; hay protestas contra los efectos causados por la construcción de la represa de la Salvajina, en defensa de derechos humanos y en repudio al asesinato de líderes del campesinado y la Unión Patriótica; e igualmente se presentan acciones en contra de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato y en rechazo a las promesas no cumplidas por las autoridades locales. En general, tales movilizaciones dieron como resultado negociaciones con las autoridades o con las entidades a quienes iban dirigidas las exigencias, pero los acuerdos se quedaron en el papel.

Los siguientes son ejemplos de la situación que se gestaba en el sur del Cauca. En diciembre de 1985 tiene lugar en el municipio de Bolívar un paro cívico que culmina con la firma de los “Acuerdos de Bolívar”. En mayo de 1986 se lleva a cabo el paro de Sucre, corregimiento del municipio de Bolívar, y del mismo modo se suscriben los “Acuerdos de Sucre”. Más adelante, el 16 de noviembre de 1987, se realiza una marcha de campesinos de Santa Rosa (Bota Caucana) en protesta por el abandono de la región por parte del Gobierno departamental y municipal y para exigir la aplicación de las políticas del PNR –Plan Nacional de Rehabilitación– y la construcción de vías, escuelas y centros de salud, pero la movilización fue detenida por las autoridades en Guachicono, corregimiento de Bolívar. En esa fecha se firman los “Acuerdos de Guachicono” con el entonces director del Plan Nacional de Rehabilitación, Carlos Ossa Escobar. En noviembre de este mismo año los campesinos de Almaguer marcharon en apoyo a la movilización de Santa Rosa, pero igualmente fueron detenidos en La Vega. Allí se firman con el Gobierno los “Acuerdos de La Vega”.

En octubre de 1988, ocurren dos paros cívicos, uno en Bolívar en protesta por el incumplimiento de los acuerdos firmados en noviembre del año anterior, y entonces los campesinos realizan una marcha hacia Popayán, otro en Argelia, ocasión en la cual los campesinos exigieron al alcalde la construcción de una vía. En la misma época los campesinos de Corinto y Popayán se tomaron varias oficinas gubernamentales para reclamar servicios y oponerse a la fumigación con glifosato.

17 Entrevista con líderes, septiembre de 2001.

18 Véase anexo 2: Luchas sociales en el departamento del Cauca 1985-1990.

El 28 de noviembre de 1989 se lleva a cabo la toma de Almaguer. En esta jornada los campesinos de las veredas ocupan la cabecera municipal como estrategia para vincular “la administración municipal, profesores, estudiantes y demás instituciones de la cabecera al proceso organizativo y la problemática del municipio”.¹⁹ Esta movilización es explicada por los líderes del movimiento como “el primer embrión organizativo del Macizo Colombiano que se conociera en la región, la Coordinadora Campesina sería la encargada de convocar, de allí en adelante, los cabildos populares en dicho municipio”.²⁰ A partir de entonces los cabildos populares se establecen como escenarios de encuentro en nuevo avance hacia la creación del Movimiento de Integración del Macizo Colombiano.

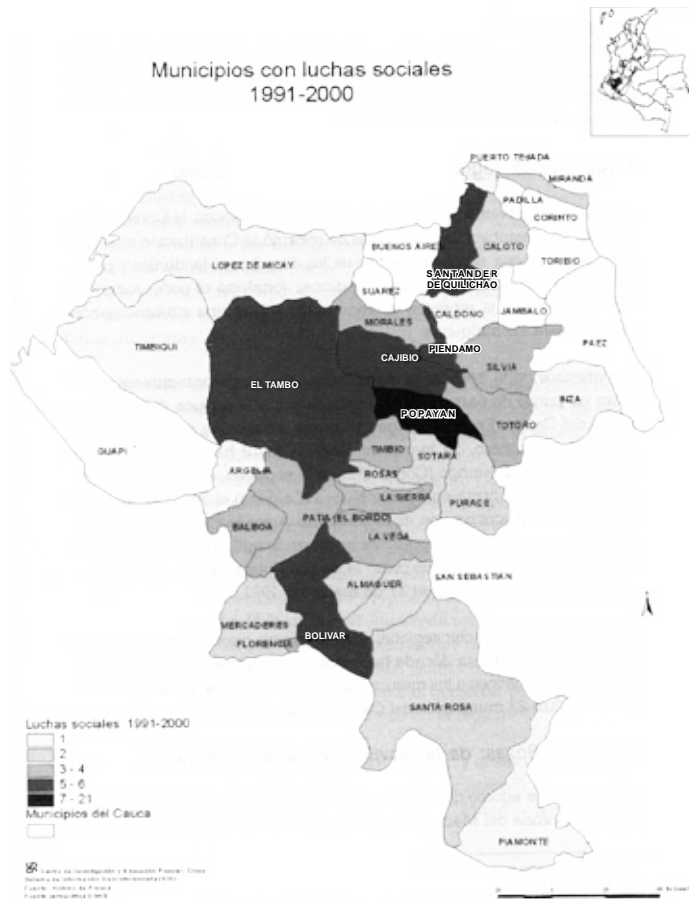
Paros, marchas, tomas de instalaciones y bloqueos de vías constituyen la herramienta fundamental, pero hay un ingrediente más: el sur del departamento del Cauca irrumpe en el escenario nacional y llama la atención sobre los graves problemas sociales, políticos, económicos y ambientales del Macizo Colombiano. Las protestas continúan siendo locales y promovidas por indígenas y campesinos, estudiantes, mujeres, empleados y trabajadores independientes que exigen al Gobierno nacional y al Incora solución a problemas de titulación y adquisición de tierras, condonación de deudas y ejecución de proyectos productivos. A estas exigencias se agregan demandas de electrificación, acueductos y alcantarillados, vivienda, escuelas y maestros, así como el reconocimiento de los derechos humanos (véase mapa 3: Municipios con luchas sociales, 1991-2000). En cada protesta a las exigencias propias del momento se suman aquellas contempladas en los acuerdos firmados con el Gobierno desde 1985 y que no se habían cumplido hasta la fecha.²¹

19 “Primer período: gestación y despertar”, en Maciceña, noviembre de 2000, p.7.

20 “Primer período: gestación y despertar”, en Maciceña, noviembre de 2000, p.7.

21 Véase Anexo 3: Luchas sociales 1991-2000.

Mapa 3



Es importante señalar que la concentración de protestas en un municipio no significa que sea mayor su capacidad de lucha. Por lo general, se trata de pueblos situados estratégicamente, donde confluyen indígenas y campesinos con el fin de ejercer mayor presión ante las autoridades para la solución de sus demandas.²²

Paros cívicos regionales del macizo colombiano

La década del noventa se inicia con un nuevo pacto social: la Constitución de 1991. La Asamblea Constituyente no reformó la Constitución, sino que produjo

²² Entrevista con líderes del Cauca, octubre de 2002.

una nueva: amplió el campo de los derechos individuales y políticos y de la autonomía municipal y regional; fortaleció el poder judicial y para desbloquear la representatividad política creó una circunscripción nacional para los indígenas.

A comienzos de la década de los noventa, algunos acontecimientos señalan un punto de partida en la dinámica social y política del departamento del Cauca. En primer lugar, se llevan a cabo dos acuerdos nacionales: en el primero, de marzo de 1990, el M-19 hace entrega de las armas en Santo Domingo (Corinto);²³ en el segundo, del 27 de mayo de 1991, el Gobierno firma en Pueblo Nuevo (Caldono) el Pacto Político por la Paz y la Democracia con el Movimiento Armado Quintín Lame. Por otro lado, se agudizan los conflictos internos, la militarización, las muertes selectivas y las masacres como la de Los Uvas y El Nilo, en el municipio de La Vega, ocurrida el 31 de marzo de 1991.

Las protestas de carácter regional imprimen una nueva dimensión a las luchas sociales. En esta década hubo dos paros cívicos regionales: el primero, en 1991 convocó a los municipios del sur del Cauca, y el segundo, en 1999, movilizó veintitrés municipios del Cauca y seis de Nariño.

El paro de Rosas: de la movilización a la organización

Del 20 al 26 de agosto de 1991, más de treinta mil campesinos de los municipios de la zona del Macizo bloquean la vía Panamericana en inmediaciones de Rosas. En el paro participan campesinos, indígenas y negros de los municipios de Rosas, La Sierra, Argelia, Balboa, Mercaderes, Florencia, La Vega, San Sebastián, Almaguer, Bolívar y Santa Rosa (véase mapa 4: Paro cívico regional del Macizo Colombiano).

Esta movilización se presenta después de la celebración de una serie de asambleas y cabildos populares donde se replantean las demandas y el tipo de protestas centradas en hechos que no trascienden el marco municipal. En estos encuentros se analizan temas como la importancia de vincular al proceso a los habitantes de las cabeceras, la necesidad de extender la agitación local hacia un ámbito más amplio de movilización que permita una mayor efectividad de las protestas y la exigencia de una solución conjunta de los acuerdos firmados con el Gobierno en paros anteriores.

Ya desde 1990, en los dos primeros cabildos populares realizados en el municipio de Almaguer, se discute la creación del Movimiento de Integración

23 En cumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno nacional y el M-19 el 2 de noviembre de 1989.

del Macizo Colombiano –Mimacizo– y se plantea la necesidad de contar con una organización que integre a los municipios del Macizo como región. El Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA– conformado por líderes y dirigentes encargados de trazar las políticas y conducir el movimiento, se convierte en uno de los soportes organizativos. En una asamblea de delegados efectuada en marzo de 1991 se sentaron las bases para sacar adelante una propuesta regional con cuatro líneas de acción: la integración local y regional, la realización del “Primer Encuentro Cultural del Macizo”, la elaboración de un periódico regional y la organización de un paro cívico regional de los municipios del Macizo.²⁴ Estas directrices le permiten al CIMA exigir, en forma integrada, el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno, pero fundamentalmente “comenzar a ser poder y gobierno en la región”.²⁵

Como resultado, el CIMA se plantea la fiscalización y el seguimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno nacional, la coordinación de espacios y procesos de unidad con indígenas y campesinos del Macizo y la ampliación de acciones con organizaciones de otros municipios del Cauca, Nariño, Huila y Valle del Cauca.²⁶ Las exigencias van dirigidas no solo a las administraciones municipales y departamentales, sino fundamentalmente al Gobierno nacional, y este se hace presente en las deliberaciones sobre el pliego que es elaborado para la negociación. Se logra la difusión de sus demandas en el ámbito regional, nacional e internacional, un llamado de atención sobre las potencialidades del Macizo, como un lugar habitado especialmente por comunidades indígenas, campesinas y negras, y poseedor de una gran biodiversidad. Desde entonces, el Comité de Integración del Macizo Colombiano se constituye en vocero e interlocutor ante las entidades del Estado y otras organizaciones, tanto del orden nacional como del regional y local.

24 “Movilización para la organización”, en Maciceña, noviembre de 2000, p. 6.

25 “Movilización para la organización”, en Maciceña, noviembre de 2000, p. 6.

26 “Movilización para la organización”, en *Maciceña*, noviembre de 2000, p. 6.

Mapa 4



El paro del suroccidente colombiano: una visión regional del desarrollo

El paro de 1999 se puede interpretar como parte del proceso de construcción de relaciones, de acciones y de significados a través de encuentros y alianzas con diversos actores sociales e institucionales que tienen lugar después del paro de Rosas de 1991.

En 1993 se realiza en Almaguer la primera asamblea del Macizo Colombiano. En el evento participaron representantes de quince municipios del Cauca: juntas de acción comunal, campesinos e indígenas, alcaldes y concejales, educadores, médicos tradicionales, promotores de salud, madres comunitarias, médicos del Servicio Seccional de Salud. El propósito fundamental del encuentro fue evaluar los procesos de organización del CIMA como una “experiencia amplia, democrática, pluralista y pluriétnica, que se propone como expresión regional la búsqueda de bienestar para todos, por medio de la organización comunitaria y la participación política”.²⁷ Se analizaron aspectos tales como el pensamiento CIMA, su experiencia en la participación electoral y la gestión municipal, un proyecto pedagógico y de comunicaciones y su actividad como movimiento alternativo con una visión de desarrollo regional.²⁸

En 1994 se realiza en el corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar, el “Primer Encuentro Cultural del Macizo Colombiano” y la llamada “Toma Artística de Popayán”. Participan grupos artísticos y culturales del Macizo con el objeto de hacer visible la riqueza e identidad cultural de esa región.

Desde finales del mes de agosto hasta septiembre de 1996 se realiza la “Segunda Movilización Concertada del Macizo y sur del Cauca”.²⁹ Después del paro de Rosas, veinticuatro voceros de doce municipios negocian de nuevo con el Gobierno nacional y departamental sin llegar a las vías de hecho. En el mes de diciembre se realiza en el municipio de Timbío una asamblea de líderes del Macizo, y es ahí donde comienza a gestarse la integración con el suroccidente colombiano, entre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Un segundo aspecto fundamental es el incumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno sobre reforma agraria y medio ambiente, como los relativos a demandas de vivienda, salud, educación, agua potable, saneamiento básico y vías públicas. El incumplimiento de los acuerdos, sumado al incremento de la violación de los derechos humanos, de las masacres y las muertes selectivas, empieza a crear nuevas condiciones para la movilización regional.

27 Véase CIMA, Primera Asamblea del Macizo Colombiano. Almaguer, agosto 15-19 de 1993, p.8.

28 Véase CIMA, Primera Asamblea del Macizo Colombiano. Almaguer, agosto 15-19 de 1993, p.8.

29 Véase CIMA, Primera Asamblea del Macizo Colombiano. Almaguer, agosto 15-19 de 1993, p.7. y entrevista con líderes del Macizo, septiembre de 2001.

Desde principios de 1999 las organizaciones indígenas y campesinas comienzan a examinar los acuerdos celebrados con el Gobierno. Campesinos e indígenas del Macizo, La María, Río blanco y El Tambo, mineros de Puracé y fiqueros, en reunión con representantes del Gobierno departamental revisaron ocho acuerdos de tierras y créditos que se habían suscrito con organizaciones campesinas entre 1996 y 1997.³⁰ También en el mes de mayo, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Cauca –Agropenca– puso sobre la mesa los acuerdos de los últimos tres años y presentó un pliego de peticiones a nombre de los agricultores del Cauca organizados en esa asociación. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la ANUC y contó con la presencia de los ministros de Agricultura, Transporte, Educación, Salud y el director del Departamento Nacional de Planeación. El nuevo pliego se relaciona con las nuevas adquisiciones de tierras, la vivienda campesina y el caso de los paneleros, que se oponen al proyecto industrial del municipio de Padilla.³¹

A esta circunstancia se suma la protesta de los indígenas del CRIC, que habían taponado la vía Panamericana para denunciar la actitud del Ministerio del Interior, que se había comprometido por decreto a declarar la emergencia económica, cultural y social en los resguardos. No solo no había asistido a la reunión, sino que había cambiado en un 80 % los términos acordados con la organización indígena.³² También desde 1999, más de cuatrocientos campesinos e indígenas guambianos, paéces y yanacunas, acompañados por delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Cruz Roja se reunieron en Almaguer para participar en el “Cabildo por la vida y la convivencia”, para denunciar las diferentes formas de violencia que estaban enfrentando en la región.

En este período, en asambleas y cabildos, los indígenas, campesinos y trabajadores hicieron énfasis en la defensa de la vida contra la violencia, el medio ambiente y los derechos étnicos y culturales, y exigieron el cumplimiento de los pactos suscritos desde 1991.

El pliego de peticiones

El proceso dio como resultado un pliego de peticiones presentado por los líderes para la negociación con el Gobierno en 1999. El pliego que buscaba enfrentar los problemas desde una concepción de desarrollo regional, planteó cinco puntos fundametales:

1. Reforma agraria, que contemplaba dos aspectos: el primero se centraba

30 *El País*, 11 de septiembre de 1998, p. 3C.

31 *El País*, 21 de mayo de 1999, p. 3D.

32 *El Espectador*, 9 de junio de 1999, p. 13A.

en el problema de las tierras y hacía referencia a la condonación de las deudas por tierras adquiridas mediante el Incora, legalización de títulos, adecuación de predios y adquisición de cincuenta mil hectáreas; estratificación rural: estrato cero para las fincas y predios de pequeños y medianos campesinos; creación de un fondo rotatorio para grupos de producción con la suma de 100.000 mil millones de pesos para el fomento y fortalecimiento de la producción; transformación y comercialización agropecuaria y artesanal. El segundo aspecto comprendía el tema de la producción y la comercialización: financiamiento de la elaboración y ejecución del Plan Ambiental Agropecuario de los municipios de Cajibío y del norte de Nariño; financiación de proyectos regionales de producción, asistencia y comercialización de doble vía; seguridad alimentaria, fomento y financiación de centros agroindustriales, maquinaria e infraestructura para la producción; formación y capacitación técnica y agropecuaria para la producción artesanal y agropecuaria de pequeños productores campesinos.

2. Derechos sociales: apertura de programas de vivienda rural y urbana, subsidio de vivienda rural para los municipios movilizados; ampliación al 100 % del régimen subsidiado de salud; asignación de recursos para el Hospital San José de Popayán, que garanticen su normal funcionamiento; educadores con cargo a municipios y departamento queden bajo la responsabilidad de la nación; construcción, ampliación y dotación de centros educativos.
3. Servicios públicos: electrificación, acceso a la energía eléctrica mediante la cofinanciación de proyectos de electrificación rural. Saneamiento básico: construcción de acueductos, alcantarillados, sistemas de manejo integral de residuos sólidos, lagunas de oxidación, biogestores y mataderos.
4. Derechos humanos: garantías para comunidades y líderes movilizados, respeto y veeduría internacional y creación de una escuela permanente de derechos humanos.
5. Medio ambiente: expedición de una ley de páramos e inversión social y económica, por ser reserva de la biosfera; protección a la biodiversidad y el ecoturismo, acceso al certificado de incentivo forestal.

El segundo paro regional

Cuando consideraron que el Gobierno ya no les iba a cumplir los acuerdos firmados entre 1991 y 1996, un grupo de líderes comenzó a convocar a campesinos, educadores y trabajadores municipales de veintiséis municipios del Cauca y doce de Nariño. Se analiza la situación, se hacen nuevas peticiones y se fija la fecha

del nuevo paro. El día primero de noviembre “se levantan los cambuches, se organizan los ‘cordones’ y se conforman las primeras comisiones por más de diez mil marchantes, entre ellos campesinos, maestros, estudiantes y sindicalistas”.³³ Durante veintiséis días las comunidades del Macizo bloquearon la vía Panamericana en dos sitios, Galíndez (límites de El Bordo y Mercaderes) y El Cairo (Cajibío). En esta ocasión participan veintitrés municipios caucanos y seis del nororiente de Nariño (véase mapa 5: Paro cívico del suroccidente colombiano).

Otros grupos sociales se unen a la protesta. En Popayán, los transportadores, el sector de la salud, las colonias, así como las universidades y colegios suspenden actividades. Durante el tiempo del paro se realizaron cuatro marchas, que culminaron en una concentración en el parque de Caldas, principal escenario público de la capital, para presionar las negociaciones con el Gobierno nacional.³⁴ En la marcha participan líderes sindicales, profesores, estudiantes, trabajadores de la salud, representantes de las nueve comunas, empleados del Sena y de la industria de Licores del Cauca y los vendedores ambulantes.³⁵

Las autoridades de sesenta resguardos indígenas del departamento iniciaron consultas con sus comunidades para pasar de la solidaridad al apoyo efectivo. Unos siete mil indígenas de los resguardos de la zona centro del departamento, agrupados en la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, se sumaron al movimiento y se ubicaron, en el punto “Patico” de la carretera que va al Huila, que corresponde al resguardo de Puracé. Las comunidades de la zona oriental se congregaron en el resguardo de La María. Las comunidades de Morales se unieron a la protesta en Piendamó. Entre tanto, unos cinco mil indígenas paéces de catorce cabildos indígenas del norte y nororiente del Cauca se desplazaron hacia Santander de Quilichao para apoyar a los campesinos, comunidades negras y maestros de ocho municipios del norte del Cauca.³⁶ Un grupo de campesinos ocupó la alcaldía de Almaguer y otro la de Bolívar. En algunos municipios del nororiente de Nariño (La Cruz, San Pablo, Belén, Colón, Génova y San Bernardo) los campesinos se toman la alcaldía y las oficinas del Banco Agrario.

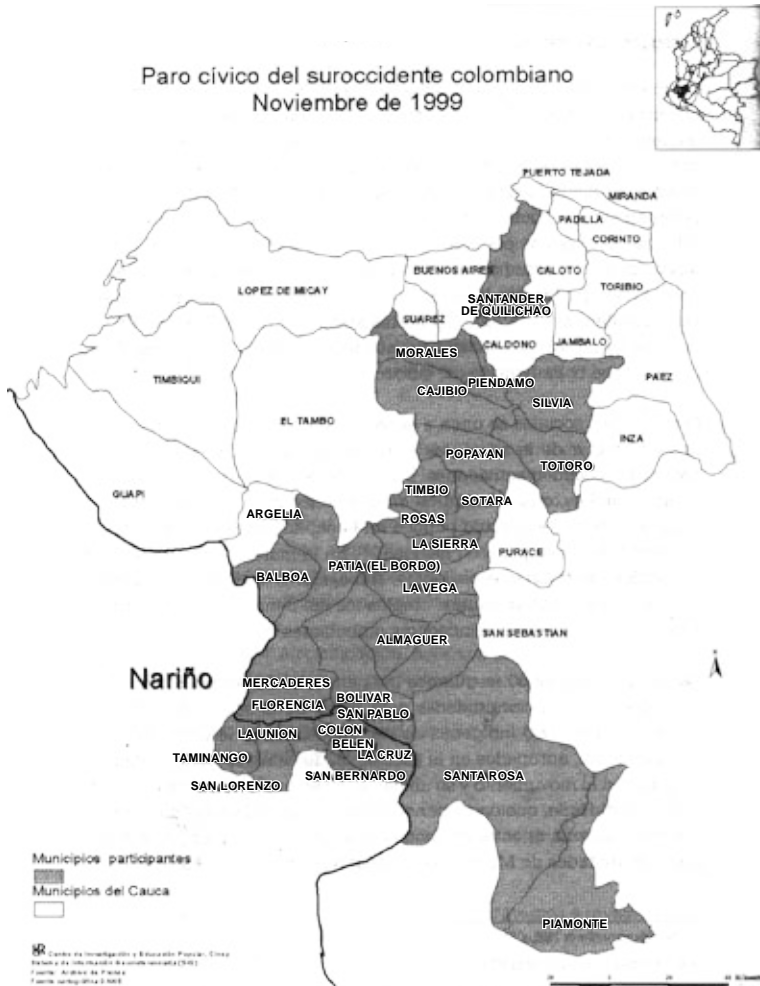
33 *Maciceña*, noviembre de 2000, p. 38.

34 *El Colombiano*, 18 de noviembre de 1999, p. 10A.

35 *El Espectador*, 19 de noviembre de 1999, p. 9A.

36 Consejo Regional Indígena del Cauca. Boletín de Prensa, noviembre 19 de 1990, citado en *Maciceña*, noviembre de 2000, p. 35, y *El Tiempo*, 20 de noviembre de 1999, p. 6A.

Mapa 5



Después de 18 días de paro, y sin posibilidades de llegar a un acuerdo entre los líderes del movimiento y el Gobierno, la prensa denuncia que los campesinos son presionados por las FARC y el ELN que exigen “a cada familia dos personas como cuota para que releven a los que se encuentran en los lugares de bloqueo a la Panamericana”.³⁷ Igual señalamiento hace el viceministro del Interior, quien anuncia “operativos militares para evitar la infiltración y aprovechamiento de

³⁷ *El Espectador*, 18 de noviembre de 1999, pág. 8A, y *El Tiempo*, 22 de noviembre de 1999, p. 6A.

la guerrilla”.³⁸ Indígenas paéces de Villarrica, que marchaban hacia La María (Piendamó) en solidaridad con la movilización campesina, niegan la supuesta manipulación por parte de la guerrilla y, por el contrario, denuncian las continuas presiones de la insurgencia contra su autonomía y el asesinato por parte del ELN de dos líderes del resguardo de Paletará, y cuestionan la presión que ejerce el Sexto Frente de las FARC en Jambaló y Corinto, donde se oponen a la constitución del resguardo indígena.³⁹

Resultados del paro

Más allá de la negociación, lo que realmente queda en claro son los problemas de la estructura agraria colombiana y el desarrollo desigual de las regiones. Así mismo, se puede percibir que la descentralización deja a las regiones con responsabilidades, pero sin autonomía y sin posibilidades de desarrollo regional. Los políticos tradicionales no aparecen, en estos casos, para enfrentar los problemas y proponer soluciones. La desarticulación entre el Gobierno central y las regiones se traduce en las disputas políticas entre el poder central y los gobiernos departamentales. El paro cuestiona las políticas de Estado “todas las estrategias nacionales hicieron crisis en este paro”,⁴⁰ y deja entrever la forma como se están concertando los planes de desarrollo regionales, de espaldas a las comunidades y sus necesidades.

En cuanto a la orientación del Gobierno nacional sobre este conflicto, es interesante resaltar que el ministro del Interior explica la protesta como resultado del mal manejo de los recursos por parte de las autoridades locales y deja entrever que había disputas políticas entre el Gobierno central y las autoridades departamentales:

En un comienzo –dice una crónica de *El Espectador*– se le echó la culpa al gobernador del Cauca [...] y se quiso reducir un problema social de dimensiones impresionantes a una furrusca política por vainas de puestos; después se le echó la culpa a la guerrilla, en un intento del ministro del Interior por deslegitimar la protesta, haciendo rodar el rumor equivocado de que el paro había sido organizado y dirigido por las FARC.⁴¹

Los líderes del movimiento parten de la base de que esta nueva negociación implica el reconocimiento de que la deuda social, económica y ecológica que el Gobierno tiene con el suroccidente no se puede resolver en un solo periodo

38 *El Colombiano*, 18 de noviembre de 1999, p. 10A.

39 *El Tiempo*, 23 de noviembre de 1999, p. 6A.

40 *El Espectador*, 28 de noviembre de 1999, p. 3A.

41 *El Espectador*, 28 de noviembre de 1999, p. 3A.

presidencial, “Pero sí podemos ganar voluntad política y acordar, con todos los caucanos y nariñenses que, desde una concertación organizada, de la que hagan parte maestros, indígenas, campesinos y gobiernos departamentales, exijamos destinaciones más justas dentro del presupuesto nacional”.⁴²

Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, se trata de

[...] decantar los resultados de esta movilización, así mismo sentarse a mirar los intereses que nos identifican y también las diferencias que tenemos con las diferentes organizaciones que participamos en la movilización, aprender a que dentro de las diferencias que hay (sic) saber identificar los puntos que nos unen y aprovechar. Evaluar la seriedad de las propuestas del Gobierno, si esto es una tomadura de pelo, si va a cumplir con los compromisos realizados y realizarle una evaluación política y mirar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos.⁴³

Bloqueo de la “pana”⁴⁴ y cerco a Popayán

Más allá de sus orientaciones, contenidos y eficacia, las protestas sociales, han logrado concentrar la atención de autoridades y medios de comunicación. Por su forma, como dice Adrián Scribano para el caso de Argentina, se alude a “la especial relación que tienen en este tipo de protestas el espacio, los sujetos, el discurso y el sentido”.⁴⁵

En el departamento del Cauca, la carretera Panamericana es un factor importante de estructuración espacial. El investigador Jiménez la divide en dos tramos claramente diferenciados: primero, desde el extremo sur del departamento, en el municipio de Mercaderes, hasta la cabecera municipal de Rosas, y segundo, desde esta cabecera hasta Santander de Quilichao, al norte. Adicionalmente, tiene en cuenta otros ejes de estructuración espacial: el eje vial Corinto-Silvia-Totoró, el eje vial Totoró-La Plata (departamento de Huila) y el abanico vial que parte de Cali hacia el Cauca.⁴⁶

42 *El Colombiano*, 14 de noviembre de 1999, p. 3A.

43 Olivero Castillo en *Maciceña*, p. 37.

44 “Pana”, término con el que se designa a la carretera Panamericana.

45 Adrián Scribano. “Argentina ‘cortada’: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste”, en Margarita López (ed.). *Lucha popular, democracia, neoliberalismo. Protesta popular en América Latina en los años del ajuste*. Caracas: Editorial Nueva.

46 Luis Carlos Jiménez. “La organización del espacio en el suroccidente de Colombia: ¿la acción del Estado en el departamento del Cauca ha contribuido a la reducción de los desequilibrios espaciales de desarrollo?”. *Cuadernos de geografía. Revista del Departamento de Geografía*. Bogotá: Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, vol. X, N° 2, 2001, p. 32.

Desde 1976, cuando se terminó de construir el tramo de la vía Panamericana entre el sitio Mojarras (municipio de Mercaderes) y la ciudad de Pasto (capital del departamento de Nariño), existe la conexión vial del sur del Cauca con el resto del suroeste del país. Desde entonces se integran a la carretera especialmente los municipios de Bolívar, Balboa y Argelia, y pierde importancia la vía carretable que comunicaba los pueblos del Macizo con el sur. Las poblaciones ubicadas alrededor de la vía Panamericana y al sur de Popayán, en las laderas del Macizo, están conformadas por campesinos, mestizos y en un porcentaje menor por indígenas y comunidades negras que se ubican en Guachicono, en el municipio de Bolívar y el valle del Patía, en el municipio de El Bordo. El eje vial Corinto-Silvia-Totoró es el principal eje de estructuración del territorio indígena caucano, el eje Totoró-La Plata, es la única opción de comunicación directa de los municipios de Inzá y Páez con Popayán y con las cuencas altas de los ríos Cauca y Magdalena.⁴⁷

El hecho de bloquear la vía Panamericana y establecer cerco a Popayán constituye para los campesinos e indígenas una estrategia de protesta eficaz, importante como forma de presión: se paralizan las actividades económicas, se interrumpe el tránsito vehicular de la única vía que comunica el sur del país con el resto del territorio nacional. Los manifestantes, que permanecieron inicialmente en la carretera Panamericana, extendieron su protesta y cerraron las vías que conducen a Popayán: al norte, el bloqueo a la Panamericana en el sitio El Cairo; al sur, el bloqueo en el sitio Galíndez; al occidente de Popayán el bloqueo es a la altura del municipio de El Tambo y al oriente la vía se obstruye en el sitio Patico, que comunica a Popayán con las carreteras Puracé-Santa Lucía-La Plata-Neiva y La Plata-Pitalito-Florencia.⁴⁸

La acción se convierte en el medio más eficaz para despertar la atención de la opinión pública nacional y lograr una respuesta de las autoridades nacionales y departamentales. La actitud de los participantes ante la efectividad del bloqueo de la carretera se resume en esta frase: “Más vale un kilómetro de carretera Panamericana que diez curules en el Congreso de la República”.⁴⁹

El bloqueo de la vía no es resultado de una decisión espontánea, sino que obedece al grado de organización alcanzado. Es indudable que para poder permanecer veintiséis días en la Panamericana fue necesario contar con formas de presión

47 Luis Carlos Jiménez. “La organización del espacio en el suroccidente de Colombia: ¿la acción del Estado en el departamento del Cauca ha contribuido a la reducción de los desequilibrios espaciales de desarrollo?”. *Cuadernos de geografía. Revista del Departamento de Geografía*. Bogotá: Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, vol. X, N° 2, 2001, p. 34-35.

48 *El Espectador*, 18 de noviembre de 1999, p. 8A.

49 José Rodrigo Orozco. “No hay mal que dure cien años no pueblo que lo resista”, en *Maciceña*, noviembre de 2000, p. 33.

por parte de los organizadores, pero la acción también es parte de un proceso de construcción de solidaridades tras la experiencia de los continuos bloqueos, tomas de instalaciones y marchas. Estos procesos van construyendo formas de participación en torno a demandas comunes y a la exigencia del cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional.

Tal modalidad de protesta rompe con la invisibilidad de sectores sociales y de regiones que secularmente han sido ignoradas por los distintos gobiernos y por la sociedad en general. Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante, por cuanto repercuten no solamente en las organizaciones, sino también en la toma de decisiones, modificando de alguna manera las relaciones entre la sociedad y el Estado. A través de los medios se puede decir que los actores sociales pretenden. 1) ganar visibilidad: los medios los hacen visibles y presentan sus demandas; 2) ganar reconocimiento: los medios cubren con gran despliegue la movilización, difundiendo la situación creada por el bloqueo y las causas de este; 3) obtener credibilidad, en cuanto sus acciones contribuyen a explicar el conflicto y sus formas de solidaridad, a dar legitimidad a las organizaciones y a que ellas sean aceptadas por la opinión pública.

Como forma de presión, el paro permite ganar seguidores a la causa de la protesta, reconocer a quienes se oponen a ella, así como a aquellos que buscan sacarle partido a la movilización. Las autoridades departamentales se suman a la protesta para denunciar la situación del departamento frente al Gobierno central y buscan servir de mediadores entre los líderes del paro y el Gobierno nacional. A los gobiernos departamentales del Cauca y Nariño se unen los gremios económicos y la Arquidiócesis. Por un lado, reclaman participación en el Plan Nacional de Desarrollo, y por otro denuncian el recorte de las transferencias de la nación a los departamentos.⁵⁰

Como escenario de confrontación con el Gobierno, el paro permite aquilatar fuerzas de parte y parte. Por un lado, a medida que avanza el paro se suman más personas: de diez mil que inician la movilización se llega a treinta mil, y del bloqueo de la vía principal, se pasa a bloqueos en otros lugares, tratando de aislar el suroccidente del país. Por su parte, el Gobierno nacional hace énfasis en que detrás de la protesta están los grupos guerrilleros, como una forma de quitarle fuerza al paro y una manera de criminalizar la lucha social.

50 Archivo de prensa del Cinep. "El suroccidente pide la palabra", en Cien días vistos por Cinep, vol. 10 N° 45, Cinep, Bogotá, julio-noviembre de 1999. P. 47.

Conclusión

Desde la década del noventa surge la iniciativa de construcción de un movimiento campesino regional. Ha sido un proceso de integración de distintos grupos sociales (campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, mujeres, trabajadores asalariados) que reclaman el derecho a la movilización, a la participación política en la toma de decisiones, y que va más allá de la unificación de luchas o de demandas globales propias del mundo campesino, indígena o de los trabajadores asalariados.

La opción de actividades que se realizan fuera de las vías institucionales supone, más allá de la legalidad que caracteriza una determinada acción, la aprobación y legitimidad social con que cuenta. Esto significa, en primer lugar, la idea de participación como construcción social; así, pues, un factor decisivo a tomar en cuenta es el proceso de atribución de sentido que los ciudadanos realizan en la concepción de la participación. En segundo lugar, se introduce la posibilidad de cambio en la construcción de la participación política. El énfasis se pone en las formas de interrelación y articulación y en el componente organizativo; lo importante de estos procesos no son tanto las actividades que se realizan en el marco de la participación, sino los contenidos, los significados y las orientaciones que los ciudadanos introducen en la esfera pública a través de sus implicaciones en estos procesos colectivos. Más allá de la participación electoral, son variadas formas de acción política a disposición de los ciudadanos que pretenden incidir en el sistema político.

Referencias citadas

Findji, María Teresa

1992. "Movimiento social y cultura política: apuntes para la historia del movimiento de autoridad indígenas de Colombia". En: Amado Guerrero (Comp.). *Cultura política, movimientos sociales y violencia en la historia de Colombia*, pp. 329-350. VIII Congreso Nacional de Historia de Colombia. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.